Escrito por Cándida Cotto / Claridad
Martes, 24 de Mayo de 2016 23:52

"De ahora en adelante todos los años lo que vamos a ver será revisiones de tarifas y según la tecnología vaya creando mejores sistemas de almacenamiento y más baratos, cuando eso se dé y la gente se pueda desconectar del sistema, los que no puedan hacerlo serán los que paguen los platos rotos y esos serán los pobres y los que vivimos en edificio".

Así lo afirmó en entrevista el exrepresentante del pueblo en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el ambientalista Juan Rosario. Las críticas de Rosario responden a la Ley 57- Ley de Transformación y Alivio Energético, la cual hace unos días el presidente del Senado, Eduardo Bhatia celebró en su segundo año de aprobación, además de las vistas públicas de la Comisión de Energía del Senado las cuales, según Bhatia, revelaron irregularidades en la compra de combustible. Además, Rosario se refirió a la negociación de la deuda de la AEE la cual alcanzó una quita de apenas un 15% de la deuda y de paso un aumento de tarifa.

Rosario expuso a CLARIDAD que no es correcto como se ha querido pretender proyectar públicamente el que la AEE es la que fija el precio del combustible cuando va a comprar en subasta. Explicó que para comprar el combustible la AEE tiene una fórmula que se basa en unos indicadores que son los que se usan en los mercados internacionales. Es decir que la AEE lo que hace es pagar el precio del mercado que esté en la bolsa de Nueva York ese día.

Lo que si subasta la AEE –dijo Rosario– es el diferenciar, el escalador, que es lo que cobra el intermediario por buscar el combustible y transportarlo. "La idea de que hay un traqueteo es un cuento con la intención de esconder otras cosas. Se ha usado para desviar la atención de otras cosas", denunció en tono enérgico, sobre las alegadas irregularidades develadas en las vistas públicas del Senado.

Rosario expuso que cuando estuvo en el Comité de Auditoria de la JD de la AEE el cual hizo una investigación sobre este asunto no se encontró ninguna irregularidad, e incluso develó que

en conversación con los investigadores de la Comisión Senatorial, éstos coincidieron en su apreciación de que no encontraron irregularidades.

Lo que si dijo se encontró y es un aspecto que le preocupa y amerita una investigación es que cuando se hacen compras de emergencia en esas ocasiones los diferenciales eran mucho más altos, en ocasiones mucho más altos entre 2 a cinco veces que en otras. Y segundo que había un suplidor que se llevaba las subastas entre un 24 y 25 % y en las subastas de emergencia se llevaba la mitad. Denunció que ese aspecto la Comisión del Senado no lo investigó.

Otro asunto de la investigación del Senado del cual llamó la atención fue la impresión de preferencia por los laboratorios. El activista precisó que aunque había tres laboratorios en la práctica hay solo dos, porque de los tres dos son del mismo dueño. Añadió sobre el hecho de que haya pocos laboratorios a que la AEE tiene tantos requisitos que no todos no pueden cumplir con éstos. “La comisión no quiso utilizar el Informe de Auditoria de la Autoridad porque no se parecía a la teoría de ellos”, reveló. Rosario llamó la atención y denunció que el laboratorio que una vez tuvo la AEE para la evaluación del combustible tuvo que cerrarse por las pésimas condiciones en que se dejó caer, no obstante el testigo estrella de la Comisión fue el director del laboratorio responsable de su deterioro.

“Es importante que Energía Eléctrica tenga el laboratorio, tenga las herramientas para que compruebe lo que pasa en los demás”, indicó. Junto a este aspecto sí confirmó que la manera en que la AEE recibe el combustible cuando llega a puerto es “un desastre”. Rosario también contó que consultores externos de la reestructuración de la AEE señalaron que la manera en que se hace el inventario de la cantidad masiva de petróleo que llega es inadecuada. No obstante en ese mismo aspecto criticó el que se haya pretendido dar la impresión de que el petróleo que compra la AEE es malo y se paga como si fuera bueno, aclaró que no hay ninguna regulación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que prohíba recibir petróleo con .5 % de azufre, la prohibición es quemarlo.

El exmiembro de la Junta de Directores de la AEE y veterano activista de luchas ambientales denunció que tanto la investigación senatorial sobre la compra de combustible y la discusión de una supuesta reforma energética cuyo preámbulo dijo contiene una “sarta de mentiras”, en el fondo lo que hacen es esconder, “el hecho de que quebraron el país no solo a la Autoridad y ahora le echan la culpa a los directivos que participaron de eso para seguir escondiendo al país que es un esquema para entregar las corporaciones públicas en manos de los financieros internacionales”.

Rosario reiteró en que sí es necesaria una reestructuración de la AEE pero destacó que la ley de reforma de Bathia no atendió los aspectos fundamentales que fueron la intervención partidista y la deuda. Más aún, atribuyó que la razón por la cual el equipo de la síndico Liza Donahue no tuvo más logros en la negociación de reestructuración de la deuda “fue porque los políticos se rajaron cada vez que se les planteaba que había que obligar a negociar a los brokers”, develó que hubo instrucciones de Fortaleza que debilitaron la negociación. Según contó cuando estuvo en la JD todo el tiempo el equipo de reestructuración habló de la necesidad de la AEE de una quita de un 30% de su deuda, no el 15% que finalmente se negoció.

Con esa reducción de un 15% de la deuda y la reestructuración que presenta la Ley 57 de Transformación, a juicio de Rosario la AEE no va lograr la transformación necesaria además de que mientras la AEE no tenga el dinero para la compra del combustible va a estar sujeta al chantaje de los acreedores. Sobre la posibilidad de que la AEE transforme su producción a otras alternativas de energía renovable, Rosario sentenció que con el acuerdo de reestructuración –el cual es sólo para pagar a los bonistas– las condiciones de las plantas, que no cumplen con la legislación federal y la falta de un plan, el país estará 60 y 70 años más quemando gas.